

HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

II. LA ERA VIRREINAL

Alejandra Moreno Toscano

- 1. El siglo de oro *Daniel Cosío Villegas* 53
- 2. La conquista *Ignacio Bernal* 69
- 3. La colonización *Alejandra Moreno Toscano* 105

III. EL PERÍODO VIRREINAL

Luis González

- 1. El Siglo de Oro *Eduardo Blanquel* 121
- 2. La revolución *Lorenzo Meyer* 137
- 3. El parentésis *Lorenzo Meyer* 153
- 4. La reforma *Lorenzo Meyer* 169

IV. EL TRAMO MODERNO

Daniel Cosío Villegas

- 1. La república restaurada *Daniel Cosío Villegas* 181
- 2. El porfiriato *Daniel Cosío Villegas* 197

V. LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Eduardo Blanquel

- 1. 1910-1920 *Eduardo Blanquel* 213
- 2. 1921-1929 *Eduardo Blanquel* 229

VI. EL MOMENTO ACTUAL

Daniel Cosío Villegas

- 1. Hasta 1972 *Daniel Cosío Villegas* 245



EL COLEGIO DE MÉXICO

INDICE

- VII. EL ÚLTIMO DECENIO: AÑOS DE CRISIS,
AÑOS DE OPORTUNIDAD 169
Lorenzo Meyer

VII. EL ÚLTIMO DECENIO: AÑOS DE CRISIS, AÑOS DE OPORTUNIDAD

Lorenzo Meyer

EN CIERTO SENTIDO, la historia del decenio que va de 1971 a 1980 tiene antecedentes en 1968; en este año el sistema político y social heredado de la Revolución de 1910 se vio sometido a una dura prueba. Entre julio y octubre se produjeron en la ciudad de México manifestaciones multitudinarias de estudiantes y de personal académico, originadas en violentos incidentes estudiantiles en las aulas de enseñanza media y agravadas por la escalada de represión policial. Con ellas se puso en duda la legitimidad del proyecto político del régimen como no había ocurrido desde 1957-1958, cuando se desarrollaron los movimientos de huelga magisterial y de ferrocarrileros.

El movimiento de 1968 demandaba el respeto al espíritu democrático de la Constitución de 1917; lo cual, sin ser abiertamente revolucionario, equivalía a denunciar y rechazar la tendencia autoritaria y corporativa del régimen. Asimismo, la protesta ponía en entredicho el modelo de crecimiento económico que, adoptado a partir de la segunda guerra mundial había acentuado la distribución desigual de la riqueza y era incapaz de crear empleos al ritmo adecuado para absorber los incrementos demográficos. Pese a la industrialización rápida y la modernización agrícola, este modelo reafirmaba los lazos de dependencia externa y aun daba a ésta nuevas características (por ejemplo, en el área tecnológica). En fin, de manera no muy abierta pero evidente, el movimiento del 68 se manifestó en contra de los principales rasgos del sistema de economía mixta, al menos tal y como éste se había desarrollado en los últimos años. Los estudiantes, en su mayoría de clase media, no lograron sin embargo atraer el apoyo de los obreros y menos aún de los campesinos. A lo largo de la crisis, estos dos sectores comprobaron su cualidad de pilares políticos del régimen al rechazar los esfuerzos de los jóvenes por atraerlos hacia posiciones antigubernamentales.

La fuerte represión de los impugnadores, que culminó con la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, puso punto final a la "toma de las calles" por parte de los estudiantes. El grueso de la comunidad

académica se replegó a sus espacios naturales, las universidades, pero ya con una conciencia muy crítica del sistema que no tardaría en transmitirse a las siguientes generaciones o en convertirse en análisis que exponía con mayor o menor rigor las “zonas oscuras”. Ello impidió así la persistencia del espíritu triunfalista en los dirigentes políticos y económicos del país. Entre 1971 y 1980 hubo una verdadera explosión de planteamientos críticos en relación con el modelo desarrollista de crecimiento económico y con el sistema autoritario de control político.

Las consecuencias del 68 no se redujeron únicamente a la “crisis de conciencia” ni a la “conciencia de la crisis”. Hubo quienes consideraron que la represión no dejaba más alternativa que enfrentar la violencia con la violencia y ésta se dejó sentir de varias maneras. La guerrilla en México fue un fenómeno característico de los años setenta, sobre todo de su primera mitad. La guerrilla urbana, más estructurada ideológicamente, operó en las principales ciudades del país, mientras que la rural quedó localizada sobre todo en Guerrero, entidad plagada de problemas locales y donde la violencia era ya endémica. Ambas procuraron conectarse pero en realidad siguieron rutas diferentes y al final el aparato de seguridad del Estado logró desarticularlas, con lo cual prácticamente cerró este camino para la oposición. En 1977, ya durante el gobierno de López Portillo, la amplia amnistía en favor de los presos políticos buscaba aminorar el costo político de la operación.

El sistema político mexicano actual ha mostrado recientemente flexibilidad en la respuesta a sus impugnadores: generalmente ha preferido la cooptación a la represión. La administración del presidente Echeverría abrió, desde 1971, una posibilidad para volver a poner el acento en la negociación. Echeverría tomó como propia la bandera de la crítica y atacó la filosofía y la práctica de la política desarrollista del pasado reciente, sobre todo la del “desarrollo estabilizador”,

por la injusticia social que había aceptado y fomentado. Desde lo alto de la pirámide del poder se escucharon entonces condenas a los que “traicionaron los ideales de la Revolución”, al imperialismo e incluso al capitalismo. En la práctica, esta retórica —que tuvo ribetes populistas y neocardenistas— no se tradujo en cambios fundamentales aunque sí causó zozobra en algunos sectores conservadores.

Parte de la respuesta de Echeverría a los sucesos del 68 consistió en dotar de más recursos a las universidades, en aceptar e incluso alentar la formación de pequeñas organizaciones de izquierda como los partidos Mexicano de los Trabajadores y Socialista de los Trabajadores, y en poner en libertad a la mayoría de los participantes en los hechos de 1968 (algunos de los cuales se incorporaron a la administración pública). Por otra parte, se redujeron los obstáculos a la crítica hecha a través de algunos de los medios masivos de comunicación. Al final del sexenio esta libertad de expresión, parte central de la política de “apertura democrática” echeverrista, encontró abruptamente algunas limitaciones, como lo mostró en 1976 la expulsión de los directivos de *Excélsior*, el periódico nacional más importante, a la que no fue ajeno un gobierno impaciente por la persistencia y agudización de la crítica independiente. De todas maneras, el espacio conquistado por la crítica, aunque limitado, ya no se perdió.

La administración de José López Portillo, que tomó el mando en diciembre de 1976 en medio de una nueva crisis de confianza, generada sobre todo por los problemas económicos y financieros, bajó el tono de la retórica aunque también admitió el fracaso del desarrollismo, a la vez que continuó con la búsqueda de una solución institucional y legítima al problema que planteaba la existencia de una oposición débil pero organizada y activa. En 1979, a través de una reforma a la legislación sobre partidos y procesos electorales, el régimen concedió el registro oficial y sus benefi-

cios a dos partidos de izquierda, al Comunista Mexicano y el Socialista de los Trabajadores, y a uno de derecha, el Demócrata Mexicano. Este paso se complementó con cambios en la legislación para aumentar la presencia de representantes de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados mediante sistemas de representación proporcional. De esta manera se abrió el Congreso a la oposición, aunque el partido del gobierno, Partido Revolucionario Institucional (PRI), se aseguró de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y su monopolio en el Senado. Además, su dominio sobre la totalidad de las gubernaturas y los congresos locales y sobre la enorme mayoría de los municipios no fue cuestionado. La esencia de lo que se llamó "reforma política" consistió, pues, en abrir un espacio limitado, pero institucional, para la oposición, precisamente para que ésta no se volviera a ver acorralada y llevada a la vía extralegal, a la violencia.

Si bien la crisis política del decenio arranca de 1968, la económica tiene su punto de partida en 1973-1974; ambas se unen en la segunda mitad de los años setenta. Ya antes algunos habían advertido el peligro de que la industrialización a base de sustitución de importaciones, iniciada durante la segunda guerra mundial, llegara a un callejón sin salida. El meollo del problema estaba en que las posibilidades de sustituir bienes de consumo duradero y no duradero se acortaban con el tiempo, y había que sentar las bases de una etapa más compleja que contemplara la sustitución de bienes intermedios en mayor escala y la de bienes de capital, aún incipiente. Se había visto también la necesidad de impulsar la exportación de bienes manufacturados. Había que buscar que la industria creciera "hacia afuera" y así superar la dependencia casi exclusiva de exportaciones agropecuarias y mineras, pero la planta industrial que se había formado era insuficiente e ineficiente y no podía competir en el mercado mundial sino en muy contados renglones.

La inflación mundial empezó a sentirse en México en 1973. Para el año siguiente ya se había instalado definitivamente. La notable estabilidad de precios mantenida desde fines de los cincuenta se fue por la borda. Las exportaciones y los ingresos netos por turismo no crecieron al ritmo de las importaciones, lo que hizo que el déficit en la balanza de pagos tomara proporciones alarmantes: pasó de 891 millones de dólares en 1971 a 3 722 millones en 1975. La desconfianza en los círculos financieros disminuyó la inversión privada e inició la fuga de divisas. Por su parte, el gobierno acudió al endeudamiento externo en gran escala y recurrió en buena medida a instituciones bancarias privadas de Norteamérica y Europa occidental, de tal modo que el monto de su deuda saltó de 4 219 millones de dólares en 1971 a 11 612 millones en 1975. Era desde luego imposible sostener esta estrategia por mucho tiempo pues, además, la inflación, impulsada por el creciente déficit financiero del sector público, significaba una fuerte sobrevaluación del peso. Al producirse en 1976 ciertas expropiaciones agrarias que muchos juzgaron improcedentes, se acentuó la "dolarización" de la economía bancaria y financiera y aumentó la fuga abierta de capitales que llegó hasta los pequeños ahorros. Fue así inevitable decretar la "flotación" del peso el 31 de agosto de 1976, la víspera del último informe anual del gobierno del presidente Echeverría al Congreso de la Unión. El tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por dólar cayó de inmediato a alrededor de 20 pesos y posteriormente a 22.00 (o sea un descenso en términos de dólares de 37.5 a 43.25 por ciento).

Ante estas circunstancias, en muchos círculos nacionales y extranjeros se puso en duda la viabilidad de lo que apenas diez años antes se había calificado de "milagro mexicano". El clima de desconfianza política y económica se generalizó peligrosamente. La esperanza de una solución inmediata, aun cuando no de fondo, a la crisis generalizada se reforzó al anunciarse el descubrimiento de nuevos yacimientos de

hidrocarburos: las reservas probadas de petróleo y gas pasaron de 5 400 millones de barriles en 1973 a 11 000 millones en 1977 y a 60 000 millones en 1980. Las autoridades decidieron que Petróleos Mexicanos (Pemex) aprovechara el aumento extraordinario de los precios mundiales; el proyecto oficial era lograr una producción de petróleo suficiente para satisfacer la creciente demanda interna de energéticos y además exportar lo necesario para disminuir el gran déficit de la balanza de pagos —agudizado en los últimos años del decenio por la importación masiva de alimentos—, pero sin llegar a crear distorsiones en la economía al no poderse absorber adecuadamente los nuevos recursos. La cifra que al fin se adoptó como “plataforma” o meta de producción después de varios cambios de criterio, fue de 2.7 millones de barriles diarios, aproximadamente la mitad para el mercado interno y el resto para exportación. El objetivo era no convertir a México en un “país petrolero” más, sino usar el petróleo, nacionalizado desde 1938, como un medio para corregir las notables fallas estructurales de la economía mexicana; es decir, acelerar la creación de empleos, lograr la eficiencia industrial y la autosuficiencia alimentaria, ampliar la red de comunicaciones y mejorar los sistemas educativo y de protección social. Al auge mismo del sector petrolero se añadía la canalización creciente de recursos fiscales derivados de dicho sector y el fortalecimiento de la inversión industrial privada, de tal manera que cuando el petróleo se agotara, en el siglo próximo, ya se hubiera consolidado la base para una riqueza industrial y agropecuaria más sólida y permanente. Éste fue el objeto del Plan Global de Desarrollo presentado por el gobierno en 1980. El éxito de tan importante proyecto, aunque posible, aún no está asegurado al iniciarse el decenio de los ochenta.

Las tendencias a la concentración del ingreso, que venían de tiempo atrás, se acentuaron en el periodo 1971-1980 debido al surgimiento de la inflación, a que las varias refor-

mas impositivas de esos años fueron insuficientes y a que no se atacaron radicalmente problemas estructurales de la economía, en especial la baja productividad de grandes sectores de la agricultura. Según una encuesta de la Secretaría de Programación y Presupuesto llevada a cabo en 1977, 50% de las familias con menores ingresos recibía 13.5% del ingreso total, y en cambio 10% que estaba en la cúspide de la pirámide recibía 46% del mismo.

No debe sorprender que la mayor posibilidad de actuar de la oposición, fortalecida por la reforma política, aunada a la inflación y a otros fenómenos relacionados, hayan favorecido el fortalecimiento de los movimientos sindicales independientes, entre los que destacaron la Unidad Obrera Independiente, la Tendencia Democrática de los Electricistas, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el Frente Auténtico del Trabajo, los sindicatos de las universidades y algunos de grandes empresas privadas. Sin embargo, aunque importante, el fenómeno insurgente estuvo lejos de poner en peligro el control del régimen sobre el grueso del movimiento obrero organizado a través del Congreso del Trabajo, cuyo centro vital siguió siendo la Confederación de Trabajadores de México (CTM). En realidad, y pese a ciertos roces con el gobierno de Echeverría en los inicios de su sexenio, la CTM se afirmó en estos años como el pilar más sólido del partido oficial (PRI), del gobierno y del régimen, precisamente por su capacidad para lograr, no obstante los efectos de la crisis económica, que los trabajadores aceptaran los topes salariales señalados por las autoridades de acuerdo con las obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional en 1976, y que desde el punto de vista del control de la situación económica a corto plazo eran indispensables para ayudar a moderar la inflación.

El control de los trabajadores organizados fue sólo una cara del problema. Según cálculos recientes, los trabajadores sindicalizados suman aproximadamente cinco millones. Si a

éstos se añaden otros cinco millones de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y otras que también son miembros corporativos del PRI, resulta que de todas formas 50% de la fuerza de trabajo estaba organizada. De los no organizados una buena parte estaba compuesta por subempleados o desempleados, es decir, por marginados. Si estos sectores hubieran sido capaces de organizarse y articular sus demandas de empleo, vivienda, salud, trabajo, servicios, el sistema casi no hubiera podido hacerles frente. Fue, en cierta medida, labor de las propias organizaciones del PRI y del Estado el seguir llenando este vacío mediante programas relativamente baratos de empleo rural, saneamiento, creación de algunas infraestructuras urbanas, programas de regularización de tenencia de la tierra en asentamientos espontáneos, formación de organizaciones de colonos o cooptación de los líderes naturales. Los partidos de oposición y en particular la izquierda no pudieron avanzar mucho en la organización de esta vasta masa apolítica, pese a que en principio, los marginados debían sentir poca lealtad hacia el régimen y ser sensibles a las banderas de quienes rechazaban el *statu quo*.

En los años setenta el tema del desempleo se convirtió en preocupación nacional prioritaria. Esto se explica en parte por el hecho de que la población del país siguió aumentando a ritmo acelerado —50.6 millones en 1970 y 70 millones en 1980— a pesar de las políticas de planificación familiar y de diversos factores sociales y culturales que empezaron a motivar a las parejas a favor de un tamaño de familia menor al tradicional. A partir de 1975 empezó a descender la tasa de natalidad, y para 1980 el ritmo de incremento demográfico se había reducido de 3.6 a menos de 2.8% anual.

Hasta fechas recientes México era un país rural en donde el propio atraso de los sistemas productivos paliaba el desem-

pleo mediante economías de subsistencia y autoconsumo. Para 1970, sin embargo, 45% de los mexicanos vivía en conglomerados mayores de 15 mil personas, y en 1980 la proporción superó 50%. La emigración del campo a la ciudad parecía incontenible y agudizó los ya numerosos problemas urbanos, sobre todo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que al final del periodo contaba con 14 millones de habitantes, y en Monterrey, Guadalajara y Tijuana, y aún en ciudades menores como Coatzacoalcos y Acapulco.

La mayoría de los mexicanos ya no trabajaba directamente la tierra: en 1977 sólo 40% de la fuerza de trabajo estaba dedicada a actividades agropecuarias. Esto produjo, entre otras cosas, que la mayoría de los jóvenes que ingresaban a la fuerza de trabajo debiera buscar ocupación en la industria de transformación o en los servicios; pero la expansión del empleo en estas ramas fue lenta y la demanda de mano de obra se refería crecientemente a trabajadores calificados o semicalificados, y no a fuerza de trabajo sin calificación ni educación como era la que procedía de las áreas rurales. La mayor participación de la mujer en la población económicamente activa también contribuyó a limitar oportunidades de empleo para los hombres. Por lo demás, pocos países han experimentado un incremento tan rápido de su población en edad de trabajar en un sistema económico insuficientemente dinámico y estructuralmente desequilibrado.

El relativo abandono del campo en el pasado inmediato no sólo alentó la emigración rural a las ciudades o hacia Estados Unidos además dio lugar a que la producción de alimentos y de ciertas materias primas no se adecuara al ritmo de la demanda. A ello contribuyó también la falta de estímulo a la agricultura por la vía de precios de garantía y mejoramiento de condiciones de producción en las áreas menos favorecidas y más pobladas. México perdió su autosuficiencia alimentaria y debió recurrir a importaciones masivas de granos, leche en polvo, azúcar y otros productos de consumo

básico. Un gran debate en torno a las formas de propiedad más adecuadas para aumentar la producción actualizó la discusión entre quienes apoyaban y quienes atacaban el ejido. El gobierno decidió no alterar la estructura mixta de la propiedad rural, más por motivos políticos que económicos. De cualquier manera, al final del decenio era obvio que el gobierno procuraba hacer esfuerzos extraordinarios para revitalizar la agricultura a través de aumentos en los precios de garantía de ciertos productos alimenticios, la mejora del sistema de crédito rural, el apoyo a la mecanización y la transformación de tierras ganaderas en zonas de cultivo; en fin, a través del esfuerzo por hacer del campo una opción racional para el trabajo y el capital. Todas estas políticas coincidieron en un proyecto ambicioso presentado a principios de 1980: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que tenía entre sus metas a mediano plazo devolver al país la relativa autosuficiencia en materia alimentaria que había llegado a tener en el pasado, mejorar la conservación y comercialización de productos y elevar los niveles de nutrición de grandes sectores de la población urbana y rural.

Respecto del mundo exterior, los años setenta presenciaron cambios importantes. La política de México se había caracterizado por su naturaleza defensiva y, en cierta medida, pasiva. Los regímenes posrevolucionarios fueron bastante discretos en cuanto a la actuación de México en foros internacionales. Al tomar posesión de su cargo, en diciembre de 1970, el presidente Echeverría dejó entrever que su administración continuaría con esta práctica; sin embargo, poco tiempo después su gobierno se lanzó al campo internacional con brío y por caminos nuevos. La razón principal fue quizá la conciencia de que México había perdido interés para Estados Unidos y que era necesario buscar nuevas oportunidades en el mundo externo, a pesar de los factores geopolíticos. De todas maneras, si a raíz de la segunda guerra mundial había existido una "relación especial" entre ambos

países, ésta era cada vez más tenue, como bien lo demostraron algunas acciones norteamericanas: en 1969, sin aviso y de manera abrupta, Washington interfirió en el turismo fronterizo para obligar a México a fortalecer su campaña contra el narcotráfico; en 1971, Estados Unidos hizo caso omiso de las demandas mexicanas en el sentido de que se eximiera a sus productos del gravamen general de 10% decretado por el gobierno de ese país sobre sus importaciones.

Ante lo que México interpretó como una actitud negativa e irreversible de Estados Unidos, el presidente Echeverría consideró necesario propiciar un acercamiento con los países del Tercer Mundo para tratar de arrancar a las naciones desarrolladas en un esfuerzo concertado, las concesiones económicas que con urgencia requerían las economías dependientes y periféricas. También fue importante crear conciencia en México de las condiciones de vida, de las que el país no está exento, imperantes en el mundo en desarrollo, y de los obstáculos internacionales a los que éste hacía frente. Tomada esta decisión no se consideró ya imprudente reavivar tradiciones nacionalistas y antimperialistas; México buscó entonces una posición de liderato que culminó con la adopción por las Naciones Unidas, en diciembre de 1974, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, una propuesta mexicana que contenía los principios económicos defendidos por la mayoría de los países subdesarrollados en nombre de la equidad internacional.

En el plano interamericano, México menospreció la dudosa utilidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en cambio apoyó con entusiasmo la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), organismo destinado a coordinar y defender los precios de las principales materias primas que exportaba la región, promover acciones coordinadas y crear empresas multinacionales latinoamericanas (incluida Cuba), entre ellas la Naviera del Caribe, para competir con las grandes compañías internacionales y dismi-

nuir los costos del transporte marítimo. En el plano político, México reactivó sus relaciones con la Cuba socialista y dio apoyo abierto al gobierno chileno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende; cuando éste fue derrocado, México rompió relaciones con los golpistas y recibió a refugiados políticos tanto de Chile como de otros países latinoamericanos. En 1979, México suspendió sus relaciones con el régimen de Somoza y después dio apoyo al gobierno revolucionario de Nicaragua.

En el plano interno, México intentó modificar un tanto las reglas del juego de la inversión extranjera directa y aflojar sus lazos de dependencia. Entre los resultados de esta política están las leyes de Registro de la Transferencia de Tecnología, Uso y Explotación de Patentes y Marcas (1972) y Promoción de la Inversión Mexicana y Regulación de la Inversión Extranjera (1973).

Las bases económicas y financieras del esfuerzo de la administración de Echeverría por lograr un grado mayor de independencia política no eran sanas y la crisis de 1976 marcó un alto súbito en este camino internacional. El gobierno de López Portillo debió buscar, en 1977, el aval del Fondo Monetario Internacional e indirectamente de Estados Unidos para lograr un clima de confianza en la viabilidad económica del país. La participación internacional de México disminuyó notablemente; sin embargo, el muy rápido desarrollo de los nuevos recursos petroleros llevó a que pronto se recuperara el ritmo de crecimiento interno y a que los mercados internacionales de capital dejaran de preocuparse por la posible insolvencia del país.

En las negociaciones con Estados Unidos las tensiones volvieron a aflorar, ahora en torno a las ventas de gas natural y a la presencia en ese país de varios millones de trabajadores mexicanos indocumentados; esta vez, sin embargo, el petróleo dio a México una aparente arma nueva de negociación. Las importaciones masivas de alimentos procedentes

de Estados Unidos y la amenaza de un endurecimiento de la política norteamericana hacia los indocumentados resultaron ser flancos débiles de la posición mexicana, pero no impidieron que México usara su petróleo para tener mayor presencia en Centroamérica —tradicionalmente zona de influencia norteamericana—, como tampoco que reafirmara sus relaciones políticas e incluso económicas con Cuba, ni que buscara activamente diversificar sus mercados petroleros para crear lazos de interés con otras potencias industriales y obtener tecnología para nuevas industrias. México se propuso lograr así una mayor flexibilidad en su política internacional.

Al finalizar el decenio de los setenta México parecía reafirmar su carácter de potencia intermedia y buscar disminuir sus lazos de dependencia respecto a su poderoso vecino del norte. A la larga, el buen éxito de esta empresa no dependía solamente de actos de voluntad, sino de la capacidad del grupo dirigente para solucionar los graves problemas internos del país: lograr una economía eficiente, reavivar la agricultura, aumentar la creación de empleos, propiciar una vida política más democrática y conseguir una distribución más equitativa del producto social; en suma, reafirmar la legitimidad del sistema.